

Bolivia. Frente a un nuevo Estado

Carlos Mesa Gisbert

Carlos Mesa Gisbert: periodista e historiador; director general de Periodistas Asociados Televisión (PAT), La Paz.

Palabras clave: sistema político, partidos, elecciones, privatización, Sánchez de Lozada, Bolivia.

Por primera vez desde que la ONU hace estadísticas mundiales, Bolivia dejó el que parecía sempiterno penúltimo lugar del hemisferio como una de las dos naciones más pobres de las tres Américas. El *Informe de Desarrollo Humano 1996* del PNUD indica que Bolivia ocupa el lugar N° 111 de entre 174 naciones, por encima de Guatemala (112), Honduras (114), El Salvador (115), Nicaragua (117) y Haití (145). No es un avance espectacular, pero quiere decir que las características de pobreza aguda que vive gran parte de la población boliviana han mejorado en algo: en lo económico, con un crecimiento sostenido a un promedio de 3% anual. del PIB desde el comienzo de los 90 después de una caída muy grave en la primera mitad de los 80; un incremento notable de la población urbana en relación a la rural (58% - 42%, frente a la relación 41% - 59% de 1976); una mejora moderada de algunos indicadores sociales como el alfabetismo (el 20% de la población es todavía analfabeta, frente al 37% en 1976); y la mortalidad infantil (74 niños mueren de cada 1000 nacidos vivos, contra 151 en 1976), y una esperanza de vida al nacer de 61,5 años, frente a 54 años en 1976. Siguen siendo cifras terribles en el contexto de su vecinos sudamericanos, pero están bastante por encima de lo que el país ofrecía hace una década. El gran drama boliviano sigue sin embargo vinculado a los espantosos niveles de pobreza en el área rural. Más del 90% de la población rural boliviana vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, cifras equivalentes a los países más pobres del África subsahariana.

La construcción de un nuevo Estado

El camino democrático del cambio. La revolución pacífica iniciada en 1985 por Víctor Paz Estenssoro culminó finalmente en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que termina su mandato el 6 de agosto de 1997. El camino de retorno a las ideas liberales, pero en el marco de un mundo globalizado, un mayor nivel de dependencia y el desafío de aplicar una democracia real, fue comenzado por

el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) al ganar el poder después de la más grave crisis económica de la historia republicana del país, traducida al cierre del gobierno de Hernán Siles Zuazo (1985) en un proceso de hiperinflación próximo al 25.000% anual, una caída del aparato productivo de casi el 40% y un PIB negativo (con su pico más grave en -6% en 1984) durante cuatro años consecutivos.

El país vivió tres etapas en los últimos doce años. Con Paz Estenssoro (1985-1989) se logró la estabilización a través de un exitoso pero durísimo proceso de *shock* que derrotó a la hiperinflación, reorganizó el sistema tributario y comenzó un moderado crecimiento económico. La segunda etapa, presidida por Jaime Paz (1989-1993), consolidó la estabilidad y dio un pequeño salto en el crecimiento del PIB, pero no pudo encarar el desafío formulado al iniciar su gobierno: «Achicar el Estado para agrandar la nación». El proceso de privatización nunca terminó de arrancar y quedó la sensación de que ese cuatrienio no encaró desafíos y respuestas para la sociedad boliviana.

La tercera etapa comenzó con el cómodo triunfo electoral de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993 (segundo consecutivo, el primero fue estéril para lograr la presidencia que quedó en manos de Paz Zamora por voto congresal, y vino de la mano de uno de los más ambiciosos programas de gobierno propuesto desde que en 1952 el mismo MNR, el partido de Sánchez de Lozada, llevó a cabo la revolución más radical que haya vivido Bolivia en su historia republicana. La idea del llamado «Plan de todos» de Goni (apodo coloquial de Sánchez de Lozada) era culminar el cambio radical pasando de una economía estatista a una economía privatizada, fortalecer la idea de una economía abierta e integrar a Bolivia a la globalización mundial. Podría pensarse que el proyecto del nuevo gobierno era ni más ni menos que la formulación neoliberal que instauraron en el mundo Margaret Thatcher y Ronald Reagan en el comienzo de los 80 y que fue precisamente Bolivia el primer país latinoamericano en aplicar en 1985, pero los hechos demostraron que esta etiqueta es insuficiente. La razón es muy simple, el programa boliviano puso en el tapete ingredientes nuevos, el concepto de la participación popular y el de la capitalización, acompañados por la reforma educativa, la descentralización y una reforma constitucional que modernizó la estructura política y judicial, además de algunos elementos tomados de las democracias europeas.

Un nuevo Poder Ejecutivo. Para poder llevar adelante este paquete de cambios, el gobierno llevó adelante una reforma radical del Poder Ejecutivo, redujo el número de ministerios de 17 a 12, diez permanentes y dos adecuados a los requerimientos de la coyuntura. Se crearon tres «superministerios», el más notable el de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de modo pionero en el hemisferio y adecuando el concepto de planificación económica a las corrientes ambientalistas y a la nueva idea de desarrollo sostenible en boga. Un ministerio de Desarrollo Humano que integra salud y educación, tiene una secretaría nacional de Participación Popular y hace énfasis en dos temas vitales, género

(mujer) y etnias. El tercer superministerio, el de Desarrollo Económico, asumió una responsabilidad que terminó superándolo, por ello tuvo que desdoblarse en Hacienda y Economía, este último uno de los dos ministerios «cambiables» o sin cartera. Nació también el Ministerio de Justicia, que se encargó de una agresiva política de modernización del sistema judicial con leyes claves como la eliminación de la prisión por deudas, la ley de fianza juratoria y la modificación integral del código penal que había sido redactado en el gobierno Bánzer (1971-1978). El otro Ministerio temporal fue el de Capitalización, verdadero motor del proceso central de las reformas de Sánchez de Lozada, que se encargó de llevar adelante la capitalización de las seis empresas más importantes del Estado.

Este cambio de fondo, que fue duramente criticado en sectores especializados, trajo consigo una casi paralización del aparato ejecutivo por varios meses hasta que el nuevo sistema se ajustó y conoció a sí mismo. El presidente perdió en esta etapa un tiempo precioso cuando aún estaba en «luna de miel» con el electorado. En los hechos se dio cierta superposición o duplicidad de responsabilidades y demasiado poder a los tres superministerios que no siempre se manejó con eficiencia.

La profundización de la democracia. Desde el punto de vista de la democracia, Participación Popular y Descentralización se apoyaron en la idea de fortalecer por una parte la democracia municipal y por la otra entregar poder de decisión a los municipios territorializados, sobre todo a los centros poblados de mayoría rural que habían estado secularmente olvidados, primero del poder central y luego del poder urbano.

La Participación Popular se basa en un principio elemental: un boliviano (la denominación monetaria del país) por cada boliviano, la distribución equitativa en función de la representación demográfica revolucionó a las pequeñas comunidades de la «Bolivia profunda». De la noche a la mañana pueblos que recibían del tesoro nacional unos centenares de bolivianos, pasaron literalmente a recibir millones. Fue un cambio radical, por primera vez los alcaldes tenían qué administrar, por primera vez las comunidades tenían capacidad de decidir sus inversiones y sus prioridades y tenían autonomía para hacerlo. Adicionalmente, se crearon los comités de vigilancia por elección apoyados sobre organizaciones territoriales de base conformadas de acuerdo a las características político-culturales de cada región (tradiciones comunitarias del mundo aymara, quechua y guaraní, por ejemplo), con capacidad de fiscalizar la administración del dinero hecha por los concejos municipales elegidos a su vez por voto popular. La Participación Popular redibujó el mapa de Bolivia (municipios territorializados) y estableció un nuevo poder local. El cambio implicaba nuevos desafíos y consecuentes desajustes, falta de experiencia administrativa, inversiones desproporcionadas en obras relativamente suntuarias, niveles de corrupción en algunas instancias administrativas; pero fue un salto casi tan importante como lo fue la reforma agraria de 1953.

La descentralización administrativa apuntó a desbloquear el asfixiante centralismo que fue un mal endémico de Bolivia a lo largo de toda su vida independiente. El mecanismo se emparentó hábilmente con la democracia municipal y por supuesto con la Participación Popular. El prefecto, la máxima autoridad departamental (el país está dividido políticamente en nueve departamentos, divididos a su vez en provincias, secciones y cantones) sigue siendo nombrado por el Presidente, en los hechos es el representante del primer mandatario para no quebrar el concepto unitario del país que establece la Constitución. Pero el aporte es la creación de un consejo departamental integrado por representantes de la capital departamental y de cada una de las provincias del departamento, donde los consejeros son elegidos por el concejo municipal de cada sección de provincia, lo que articula la base democrática de la elección y busca equilibrar el excesivo peso específico de las grandes ciudades sobre la provincias. Cada concejo tiene un presupuesto cuyo origen es el presupuesto que antes administraban las desaparecidas corporaciones departamentales de desarrollo (regalías departamentales originadas en la producción petrolera y minera, por ejemplo) y una asignación específica del tesoro general. El funcionamiento de los consejos departamentales ha sido más lento y menos eficiente hasta hoy que la Participación Popular, pero apunta también y de manera complementaria a una redistribución de ingresos y de decisiones que modificará la relación centroperiferia, ineficiente, hiperburocrática y desequilibrada del pasado inmediato.

La Reforma Educativa. La Reforma Educativa complementó esta nueva visión de país. Igual que en el resto del continente, la educación boliviana se caía a pedazos. Currículo casi decimonónico, gestión muy costosa y nada eficiente, con deficiencia endémica de la infraestructura, nivel académico de los profesores menos que mediocre, salarios muy bajos, educación cualitativamente diferenciada entre el ámbito urbano y rural, alto nivel de deserción y un resultado de bachilleres y profesionales francamente malo. La reforma era un imperativo urgente, probablemente el más urgente de los que debía encarar el país. El primer concepto fue la inserción de la educación bilingüe respetando la lengua materna de los niños (casi 3 millones de los 7,4 que tiene el país son de lengua materna no castellana), se reformularon radicalmente los programas, se redactaron nuevos textos, se está dotando a las escuelas de bibliotecas básicas y se rompió el concepto de los grados inflexibles. Sin exámenes, con evaluaciones constantes, los niños podrán teóricamente avanzar de acuerdo a su propio nivel de aprendizaje sin limitaciones de paso de curso de acuerdo a los temas que dominen más.

La gran pregunta es si el nivel de formación de los educadores está a la altura de una reforma que busca romper el concepto uniformizador y memorístico del pasado. Parece poco probable que en las actuales condiciones de infraestructura con cursos que superan como promedio el medio centenar de alumnos, los profesores puedan llevar adelante una educación personalizada y

tengan la capacidad de administrar un sistema tan flexible en relación al viejo concepto de los grados y los exámenes tradicionales. Hasta ahora el sistema se lleva adelante con cierta lentitud y con evaluaciones parciales que requieren de un análisis a fondo.

La capitalización, privatización con ingrediente social. El eje del programa de Sánchez de Lozada ha sido la capitalización, que es además la propuesta más novedosa de su gobierno. La idea privatizadora que domina América Latina en la última década tuvo sus ejemplos más ortodoxos en Perú y Argentina, sobre la idea clásica de que el Estado se desprenda de las grandes empresas productivas y de servicios que controlaba. El mecanismo fue venta de la totalidad o la mayoría de esas empresas, punto. Sánchez de Lozada llevó adelante una idea totalmente nueva. La capitalización es una forma distinta de privatización. Se capitalizaron cinco de las grandes empresas estatales: el petróleo (YPFB); las telecomunicaciones (ENTEL); la electricidad (ENDE); los ferrocarriles (ENFE); y la línea aérea de bandera (LAB); quedó pendiente la empresa de fundición de minerales (ENAF). El 50% de la empresa capitalizada se vende a un socio capitalizador que en competencia con otros postulantes y en sobre cerrado ofrece una cantidad por ese 50%. Por ejemplo, la italiana Stet pagó 610 millones de dólares por el 50% de ENTEL, y ese dinero debe entregarse y depositarse inmediatamente en una cuenta de un banco seleccionado al efecto; el dinero no fue al tesoro general, sino que necesariamente se invirtió y se invertirá en la empresa capitalizada en un lapso de siete años, a cambio de lo que la capitalizadora administra la empresa (el directorio tiene además mayoría de la capitalizadora) y recibe en ese periodo algunas ventajas (exclusividad de servicios básicamente). El 50% restante pasa a propiedad de todos los bolivianos mayores de 21 años al 31/12/95, en forma de acciones. Esas acciones son administradas por las administradoras de fondos de pensiones (AFPs) encargadas de manejar ese dinero a través de su movimiento e inversión en el sistema bursátil internacional. Progresivamente esas acciones pasarán a otras manos permitiendo el funcionamiento de las AFPs y del nuevo sistema nacional de pensiones.

Uno de los casos más complejos fue el de la capitalización de YPFB, la empresa más grande del país y verdadero eje económico del proceso. Su capitalización traía consigo el gancho de la construcción del gasoducto al Brasil (una inversión superior a los 1.800 millones de dólares), que requirió asociarse con un gigante energético. El elegido fue ENRON; el contrato con esta trasnacional era francamente favorable a sus intereses, le garantizaba alta rentabilidad por contrato, un arbitraje sito en Nueva York, exclusividad en el manejo del gasoducto incluyendo el flujo proveniente de Perú y Argentina y un cuestionable etcétera de beneficios, que despertó oposición y obligó después de un largo tira y afloja a modificar varios términos del acuerdo, lo que refleja una óptica excesivamente generosa del gobierno con los inversionistas en relación a los intereses del país.

El beneficio directo para el ciudadano, producto de este proceso, es que todos recibirán o reciben un pago anual equivalente a 250 dólares de manera vitalicia, desde el momento en que cumplen 65 años. Este beneficio favorece a una población de entre 350.000 y 400.000 bolivianos a partir de 1997. Es además una base que hace atractivo el funcionamiento de AFPs privadas internacionales en un mercado pequeño como el boliviano.

La capitalización apuntó a varias cosas: 1) dejar la sensación de que la propiedad estatal no se enajenaba (percepción que no fue asumida por la opinión pública a la vista de la respuesta mayoritariamente contraria a la medida); 2) garantizar que la inversión externa no se insumiría en el tesoro en inversiones no fiscalizables o en gastos superfluos, forzando a la inversión directa en las propias empresas, lo que adicionalmente fue un incentivo para el socio capitalizador; 3) generar ahorro interno, uno de los problemas crónicos de la economía boliviana. Finalmente, dejar un beneficio tangible al ciudadano, por lo menos en una generación de bolivianos a través del bono de solidaridad a los mayores de 65 años. Esta medida se complementó con otras dos que no tenían precedentes, la cobertura gratuita para la atención a la madre en el parto, nacimiento y post-parto, y el seguro gratuito de atención médica a todos los mayores de 65 años.

Entre las críticas más agudas a este tipo de inversión social estuvo la de que el monto del bonosol pudo haberse usado en inversión directa (infraestructura de salud y educación por ejemplo, sistemas de saneamiento ambiental, etc.). El gobierno indicó que ese dinero manejado por el Ejecutivo podía terminar mal usado o perdido en obras de pequeña cuantía sin mayor impacto real.

Puesto que lo que quedaba después de la capitalización era una nueva dimensión y rol del Estado, se implementó un sistema de regulación: el Estado dejaba su papel de planificador y actor directo de la producción y se transformaría en árbitro. La consecuencia fue la creación de un sistema de superintendencias (una general Y varias sectoriales, de energía, agua, transportes, telecomunicaciones, forestal, etc.) encargadas de regularlos servicios y defender al consumidor. Quizá el defecto haya sido la creación de un intrincado y ampuloso número de superintendentes que implican un conjunto de mecanismos burocráticos y una cierta fragmentación de responsabilidades.

La nueva Ley de la tierra. De entre el paquete de leyes aprobadas en esta legislatura, tuvo especial importancia la aprobación de la ley INRA (del Instituto Nacional de Reforma Agraria) que en los hechos fue una nueva ley de la tierra modificando el instrumento básico que primó en esta actividad, el decreto de reforma agraria de 1953. La nueva ley estableció el concepto de pago de impuesto por la propiedad de la tierra a los grandes empresarios y la exención impositiva de los pequeños. Estableció el concepto de medio ambiente y protección ecológica incluso como causa de reversión, estableció las normas que exigen a los empresarios un uso productivo y garantizó la propiedad

inembargable de las tierras de los pequeños propietarios, reconoció las formas de propiedad comunitaria y el concepto de territorios indígenas del oriente (arrancado al gobierno por los indígenas en 1990).

Una constitución reformada para el nuevo tiempo. Los cambios constitucionales apuntaron a un proceso global de modernización de la sociedad. Igual que en la Reforma Educativa iniciada por lo menos como proyecto en el gobierno anterior, reforma constitucional fue obra de todos los partidos mayoritarios y se desarrolló en dos gestiones presidenciales. El cambio más importante comenzó con la elección por dos tercios del Congreso de una nueva Corte Electoral en 1992; el prestigio de sus miembros cambió radicalmente su actuación y la percepción del ciudadano. El fantasma del fraude desapareció, consolidando la credibilidad en el proceso electoral, bajo sospecha en el pasado. Pero el salto conceptual de fondo fue la inclusión de un 50% de los candidatos a diputados como uninominales. Por primera vez en las elecciones presidenciales de junio de 1997 los votantes votarán en su circunscripción (son 68 en todo el país) por presidente, vice-presidente, senadores y diputados de lista con una marca en la papeleta electoral y por su diputado uninominal con otra marca distinta en esa misma papeleta. La Constitución ha ratificado la no reelección del presidente, pero ha ampliado su mandato de cuatro a cinco años, y contempla –aunque hasta ahora no se han elegido– el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Judicatura. Los miembros de la Corte Suprema, el Contralor y el Fiscal General deben ser elegidos por dos tercios del Congreso en su conjunto, lo que reduce drásticamente las posibilidades de que los miembros del Poder Judicial y los fiscalizadores del Estado sean controlados por partidos políticos o directamente por el Poder Ejecutivo a través de su mayoría.

Cambios a pesar del país. Pero aunque el plan de gobierno tuvo el respaldo de más del 35% de los votantes, el porcentaje más alto para un candidato desde el triunfo de Siles Zuazo en 1980, y contó con una coalición que integraba además del MNR, la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) del empresario populista Max Fernández, el Movimiento Bolivia Libre (MBL) de raíz izquierdista y el minúsculo Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL), del vicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas (lo que permitía una muy cómoda mayoría parlamentaria), a la hora de la verdad la oposición a las medidas tuvo repercusiones sociales que se tradujeron en tensión, violencia y enfrentamientos muy duros. La oposición estuvo liderada por el sindicalismo a través de la Central Obrera Boliviana (COB), pero muy en especial por dos sectores, el radicalismo trotskista enquistado sobre todo en el magisterio y los sindicatos de productores de coca del Chapare, sin duda el ala más poderosa del sindicalismo, profundamente debilitado cuando no desmantelado en el área de la minería y el sector fabril. La casi desaparición de los partidos de izquierda llevó a muchos dirigentes de estas organizaciones al nuevo esquema de partidos alineados en posiciones moderadas dentro del modelo, en partidos críticos y populistas, como Conciencia de Patria (Condepa) del comunicador y

ex-folklorista Carlos Palenque, o en el sindicalismo. Los partidos importantes de oposición ensayaron una contra cerrada a pesar de su identidad ideológica con el gobierno, salvo Condepa que criticaba abiertamente la esencia del modelo vigente.

Los dirigentes obreros y campesinos asumieron su oposición como la última gran batalla después de una saga de derrotas que se inició en 1985 con Paz Estenssoro. Se dieron perfecta cuenta de que aquí terminaba un Estado y una visión de país y comenzaba otra: era el punto de inflexión hacia otra sociedad y otra propuesta de futuro. La guerra fue total, aunque no había necesidad de ser adivino para saber que la derrota del viejo orden estaba cantada. La tosudez del Presidente a la par que su coraje estaban fuera de toda duda. El gobierno usó toda su fuerza, la mayoría incontrastable en el Parlamento, su certeza de tener la razón frecuentemente lindante en la soberbia y el poder de la fuerza pública. Los cuatro momentos cruciales fueron la Reforma Educativa, la Capitalización de los ferrocarriles, la ley INRA y la nueva ley de pensiones. En todos los casos se produjeron huelgas generales (casi siempre con escasa convocatoria) y de hambre, crucifixión en las calles, movilizaciones masivas, marchas y bloqueos callejeros sobre todo en la sede de gobierno. Los enfrentamientos callejeros entre manifestantes y policías generaron una sensación de incertidumbre y crearon la idea de que la oposición era masiva. Las cosas llegaron a un punto crítico en abril de 1994, tras la aprobación de la Reforma Educativa, cuando el gobierno decretó un estado de sitio que se prolongó seis meses y llevó a un centenar de dirigentes de los maestros y de la COB al confinamiento en las proximidades del salar de Uyuni cerca a la frontera con Chile.

Pero el más serio baldón sobre el gobierno fueron los hechos sangrientos de Amayapampa y Capacirca (centros mineros privados en el norte de Potosí), donde un conflicto entre empresarios y trabajadores que habían tomado las minas y no permitían ingresar a los nuevos inversionistas derivó en un baño de sangre con 11 muertos (10 mineros y campesinos y un oficial de policía) tras la intervención de un batallón policial para restablecer la propiedad a sus legítimos dueños. El hecho, un inadmisibles exceso de la fuerza policial, desnudó una política minera pensada en grandes inversiones que no consideró la cruda realidad de extrema pobreza de los departamentos tradicionalmente productores en crisis de decrecimiento desde hace una década. Este episodio refleja que el Estado modernizador no ha comprendido todavía que las soluciones directas e integrales en el ámbito rural no pasan exclusivamente por grandes inversiones con poco impacto de mano de obra directa y con casi nula repercusión en los lugares donde están los recursos naturales.

Neoliberalismo, una etiqueta insuficiente. El debate sobre las características ideológicas del gobierno de Sánchez de Lozada se entrapa en la hueca definición de neoliberal. Quizá el aporte más interesante de esta gestión haya sido precisamente trascender los esquemas y las recetas clásicas de aplicación de políticas de reestructuración económica meramente monetaristas,

y generalidades a propósito de la inversión privada y la economía abierta. Sobre reglas inamovibles en el marco internacional y con un inequívoco énfasis en el achicamiento del Estado, Sánchez de Lozada ofreció respuestas heterodoxas dentro del modelo, con ideas nuevas en las que se conjugaron las clásicas políticas privatistas con un énfasis en la inversión social, además de apostar directamente a una democratización más amplia a través de la participación popular. Este sistema de participación, apoyado en tradiciones y organizaciones ya existentes y con una larga tradición cultural e histórica, está muy lejos de la aplicación de un modelo neoliberal convencional. Nadie duda en Bolivia, estar a favor o en contra de lo hecho en esta Presidencia, de que el país tiene hoy nuevos instrumentos para funcionar, con una orientación claramente distinta a la que se había impuesto en 1952. Sánchez de Lozada concibió transformaciones estructurales que colocan a Bolivia en un nuevo escenario y le dan instrumentos con mayores posibilidades para su crecimiento económico a nivel macro. La modernización boliviana ha sido en este contexto, total.

Elecciones en nuevo contexto

Por eso, las elecciones de junio de 1997 tienen una caracterización diferente. El debate que había tenido sentido en 1989 y 1993 ha dejado de ser crucial. Finalmente, se ha llegado al término de una etapa, los desafíos de 1985 se han resuelto, las grandes transformaciones ya han sido realizadas, las propuestas de los candidatos y los partidos tienen que ser necesariamente distintas.

Esta elección encuentra a seis fuerzas consolidadas como las verdaderamente significativas. A pesar del desgaste de los partidos, Bolivia no ha sufrido una erosión de su sistema político equivalente al caso dramático de Perú. Los partidos siguen siendo interlocutores válidos ante el ciudadano. Como casi todos están entrampados en su inevitable alineamiento al modelo en vigencia, sus diferencias son en consecuencia de matiz y no de fondo.

Juan Carlos Durán y el MNR. El MNR ha sido conducido con mano férrea y una personalidad dominante indiscutible, la del presidente Sánchez de Lozada, que logró una combinación clave para el éxito electoral movimientista: atraer para sí a independientes generando un movimiento modernizador denominado «gonismo», que logró que el ciudadano común, aun aquel tradicionalmente contrario al MNR por su tradición intolerante y su pasado revolucionario, apoyara el proyecto. La ligazón con los independientes se tradujo en un equipo tecnócrata que incluso pasando por alto cuadros tradicionales y respetados dentro del partido ocuparon cargos de decisión y llevaron adelante el programa de gobierno. En tanto, el presidente garantizó una obediencia ciega a la bancada del MNR en diputados como en senadores (cámara en la que el MNR logró controlar los dos tercios). Esto permitió la aplicación del programa, pero desgastó fuertemente al partido, al punto de que, a pesar de que en las encuestas muchas de las leyes aprobadas gozan de respaldo mayoritario

(especialmente la Participación Popular y la Reforma Educativa), la imagen del gobierno del MNR y del Presidente están en cotas alarmantemente bajas.

La elección del candidato presidencial fue por ello muy compleja. Sánchez apostó por un independiente, el ministro de Justicia René Blattmann, que con la aprobación de sus leyes para la reforma del sistema de justicia se había convertido en la figura mejor considerada del Poder Ejecutivo por la opinión pública. No fue fácil, los aspirantes del partido Juan Carlos Durán, presidente del Senado, Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Gobierno, y Guillermo Bedregal, diputado y subjefe del MNR, no aceptaron la idea e intentaron bloquear al delfín presidencial y promover sus propias candidaturas. En el punto muerto se impuso la voz presidencial. Blattmann fue nominado candidato. Pero la ilusión duró menos de 30 días. En enero de 1997 Blattmann desató un terremoto político al renunciar irrevocablemente a su candidatura. El presidente quedó en la estacada y los ciudadanos que habían apoyado al gonismo quedaron sin piso. Nunca quedó claro el porqué de la renuncia, el supuesto boicot del partido al candidato pudo haberse revertido con el apoyo directo e inequívoco del jefe de Estado y la premisa de que «el poder no te lo dan, te lo tomas». Aparentemente, Blattmann no pudo resistirla primera ola de críticas de los medios ante su tibia intervención después de un escándalo en la alcaldía paceña, en la que la representante del MNR Gaby Candía rompió su palabra con el alcalde en funciones Ronald Maclean (de ADN), destituyéndolo y haciéndose de la alcaldía mediante un turbio mecanismo legal en lo que toda la opinión pública asumió como un golpe de Estado arropado de legalidad. Desde entonces, las posibilidades de triunfo del MNR quedaron seriamente afectadas. Después de una semanas de parálisis el partido optó por Juan Carlos Durán, que apareció como un candidato de repuesto sin el entusiasta apoyo del Presidente que habría preferido ostensiblemente a un independiente. La severa herida ante la inopinada defección de Blattmann puede ser dramática para un MNR enfrentado a una caída de imagen en la paradoja de ser protagonista de un cambio sin precedentes con un costo político que puede ser irreversible por lo menos en esta elección. Su campaña arrancó vacilante, con un candidato preso entre la posición de segundón y la fuerte personalidad del mandatario, dos veces ganador en dos elecciones anteriores y ya considerado a la altura del jefe histórico del MNR Víctor Paz Estenssoro. El triunfo parece bastante improbable, los analistas piensan que Durán buscará el segundo lugar para optar a la presidencia en el voto congresal.

Ivo Kuljis y UCS. Nacido en 1988 al calor del poder personal de Max Fernández, accionista mayoritario de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), una de las industrias más fuertes del país, la UCS nunca estableció claramente sus premisas ideológicas. Su raíz eminentemente prebendal y populista se liga a un viejo esquema caudillista, pero sus dificultades con la oficina de impuestos internos resolvieron en buena parte una adscripción al Ejecutivo, que le garantizó a éste una mayoría en el gobierno y a la empresa –identificada unitariamente con la UCS– un sosiego legal. Fernández manejó una inteligente

estrategia de amor-odio con el presidente, que le valió adscribirse a sus éxitos y desmarcarse ante sus fracasos. La inesperada muerte de Fernández en un accidente aéreo en noviembre de 1995 cerró una historia personal fascinante y contradictoria: un *self made man* de origen humilde y escasa cultura letrada, con notable olfato y sentido de la oportunidad que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del país. El heredero fue su hijo mayor Johnny, que se encontró de pronto con un abrumador triunfo en las elecciones municipales de 1995 que lo llevó a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la segunda ciudad del país y la más poderosa económicamente, como producto del voto solidario ante la reciente muerte del líder ucesista. Johnny, de 33 años, heredó también el poder en la CBN, pero no le alcanzaba la edad (35) para postular a la presidencia, lo que obligó a la UCS a buscar un candidato que se halló fuera del partido. El escogido fue otro exitoso empresario del papel, las curtiembres y la televisión, Ivo Kuljis, en 1993 candidato vicepresidencial de Carlos Palenque. La UCS aspira con buenas posibilidades, visto su pasado electoral y la base popular de su votación, a ocupar uno de los tres primeros lugares y buscar cuando menos el segundo para mantener opciones presidenciales. En todo caso aparece como un potencial aliado perfectamente viable para cualquier partido que obtuviese la presidencia.

Miguel Urioste y el MBL. El MBL tuvo que dar en 1993 el gran salto al pragmatismo. Su posición principista, que lo a dividir el MIR en 1984 en pleno gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) del que formaba parte, trajo consecuencia un caudal electoral reducido, promediando el 5%. Su giro desde posturas próximas al marxismo y a la llamada izquierda nacional hacia una apuesta por la modernidad dentro del sistema de economía abierta, le permitió formar parte del gobierno de Sánchez de Lozada. Su jefe nacional, Antonio Aranibar, es ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupa desde los inicios del gobierno. El MBL contribuyó a la aplicación de la participación popular y sobre todo a la ley INRA, pero el peso específico del MNR no le permitió cosechar los réditos que esperaba, a la vez que fue duramente criticado por quienes le recordaban su pasado radical. Sus opciones electorales siguen complicadas. El primer paso de cambio fue decidir un nuevo candidato; Aranibar, candidato en las tres elecciones anteriores, cedió el sitio a Miguel Urioste, otro histórico emebelista fuertemente comprometido en el apoyo al gobierno en varias de sus batallas más reñidas y más carismático que su antecesor. El paso siguiente fue una alianza con el máximo líder de los indígenas del oriente, Marcial Fabricano, indígena mojeño, intentando reeditar el exitoso binomio Sánchez de Lozada-Víctor Hugo Cárdenas, el primer gran salto al reconocimiento de la importancia del mundo indio en la política del país. Aunque Fabricano representa a más de una treintena de etnias de los llanos de Bolivia, su significación demográfica no cubre el 5% del total de la población de Bolivia. El desafío del MBL es romper el anillo del 5% de los votos y proyectarse como una fuerza imprescindible en el Parlamento. No la tiene fácil aunque puede capturar parte de electorado gonista decepcionado por la actual candidatura del MNR.

Hugo Bánzer y ADN. En la oposición, el partido que se ha constituido en eje de la convocatoria electoral es la ADN del general Hugo Bánzer Suárez. La estrepitosa derrota de la coalición ADN-MIR por él liderada frente a Sánchez de Lozada en 1993, pareció terminar con las posibilidades de Bánzer. En diciembre de ese año, ADN sufrió otro duro revés en las elecciones municipales en lo que fue su peor resultado electoral. Fue tal la crisis que Bánzer renunció a la política poco antes de esas elecciones. Pero el panorama iría cambiando: el escándalo que envolvió a Jaime Paz y al MIR colocaron a la ADN como el referente más importante de la oposición y ello fortaleció a Bánzer, que muy pronto regresó a la arena política y anunció su sexta candidatura presidencial. El candidato eligió acertadamente a un joven tecnócrata adenista que fue ministro de Finanzas en el gobierno de Paz Zamora, Jorge «Tuto» Quiroga, que balancea la edad del candidato presidencial y una cierta percepción de desactualización y declive físico tras una delicada operación de columna sufrida hace un par de años.

Los desaciertos del MNIZ en los meses previos a la elección contribuyeron a fortalecer la imagen ganadora de Bánzer, a quien las encuestas y la opinión pública colocan como favorito para ganar, aunque sin posibilidades de acercarse a más del 50% de los votos, lo que forzaría a una decisión en el Parlamento.

Es interesante anotar que el pasado dictatorial de Bánzer y su sistemática violación de los derechos humanos en los 7 años en que gobernó Bolivia, no vende más ante un electorado que mira como un pasado lejano los casi 20 años que median entre el fin de su férreo gobierno y los actuales comicios.

Jaime Paz y el MIR. El MIR ha vivido entre 1994 y 1997 sus años más negros. Todo comenzó con el llamado escándalo de los narcovínculos. La denuncia de dos narcotraficantes puso sobre el tapete la estrecha relación entre Jaime Paz y dos de sus hermanas con el desaparecido Isaac Chavarría, acusado de ser uno de los mayores narcotraficantes del país. Tras una larga investigación se comprobó que Chavarría había contribuido a una de las campañas electorales del MIR, partido del que era militante. El efecto sobre la opinión pública, la investigación del Congreso y la presión de Estados Unidos llevaron a Paz Zamora a renunciar «para siempre» a la política en marzo de 1994. Poco después Oscar Eid, el número dos del MIR y verdadero motor de ese partido, fue detenido y en 1996 fue sentenciado a cuatro años de cárcel por encubrimiento a un narcotraficante. Parecía que el MIR había llegado a un punto de no retorno. Paz Zamora no vio así las cosas y optó por el contraataque, y menos de ocho meses después de su dramática renuncia a la política volvió con todo, reasumió la jefatura del MIR y anunció que sería candidato a la Presidencia. En enero de 1996, EEUU le retiró de modo permanente su visa de ingreso, igual que a quien fuera su ministro del Interior y hoy número tres del partido, Carlos Saavedra Bruno, al convicto Eid, a su hermana Edith Paz Zamora y al otro ex-ministro del Interior también mirista Guillermo Capobianco. Si Paz Zamora esperaba que el

tema sería una anécdota en la campaña, estaba muy equivocado. En abril de 1997 el propio presidente Sánchez salió al ataque con la frase de que Jaime Paz y el MIR «son veneno para la democracia boliviana». Advirtió que EEUU bloquearía a Bolivia en la eventualidad de que Paz fuese presidente o parte de una coalición de gobierno, y mostró una carta confidencial de su embajador en Washington que lo confirmaba. La sombra del caso Samper y la traumática relación entre EEUU y Colombia planea sobre la elección boliviana.

El MIR intentó compensar el déficit del candidato con Samuel Doria Medina, exitoso empresario del cemento, ex-ministro de Paz Zamora y hombre a quien Washington ve con buenos ojos, pero aparentemente esta compañía no movió un ápice la percepción estadounidense sobre Paz y destacadas personalidades del mirismo. El resultado de la guerra electoral puede ser severo para el ex-presidente, aunque algunos analistas indican que la postura tradicionalmente antinorteamericana de buena parte del pueblo y la imagen de víctima del candidato, pueden deparar sorpresas electorales. En principio, las encuestas colocan a Paz Zamora como uno de los tres candidatos con mejores posibilidades.

Remedios Loza y Condepa. Condepa sufrió el golpe más serio de su corta vida política (nació en 1988) con la inesperada muerte de su jefe y caudillo Carlos Palenque. Un infarto terminó con la vida de Palenque de 53 años, que era el todopoderoso e indiscutido jefe del partido populista por antonomasia. Teñido de ideas nacional-revolucionarias gracias a ideólogos de la izquierda nacional que se incrustaron en el partido, Condepa es el partido realmente contestatario al modelo. Sus ideas inspiradas en las que hicieron posible la revolución del 52 calaron en un electorado sentimental y muy pobre, capturado en verdad por el carisma y los medios de comunicación de Palenque, a quien llamaban Compadre. Palenque solo pudo influir en el electorado del departamento de La Paz, el radio de influencia de sus medios y la estructura cultural de origen aymara más proclive a su prédica. Tras un terrible melodrama que significó la ruptura con su esposa Mónica Medina, alcaldesa de La Paz en el periodo 1993-1995, Palenque se disponía a afrontar la elección visiblemente afectado en lo emocional cuando le sobrevino la muerte. El partido eligió dos días después de la desaparición de su jefe a Remedios Loza, compañera profesional de Palenque por casi 30 años en sus programas de entretenimiento y en sus medios de comunicación. Loza es una chola paceña (mujer del pueblo de cultura aymara mestizada que viste ropas tradicionales), que recoge el mensaje populista y que es la primera mujer candidata a la Presidencia en la historia del país. Es probable que, sin Palenque, Condepa caiga un par de puntos, aunque el voto homenaje no puede desdeñarse. Es poco probable que pueda llegar más allá del cuarto lugar, que en teoría disputa con UCS, aunque los últimos acontecimientos han removido fuertemente el panorama electoral.

El nuevo escenario. Lo interesante es que una vez más el escenario está fuertemente teñido de rosado (el color símbolo del MNR). Las reformas están en

el tapete y su continuidad o rechazo es parte del debate. Lo evidente es que el panorama macroeconómico está resuelto; lo que ahora toca a los candidatos –que protagonizan una campaña de propuestas bastante grises aunque bien salpimentada de insultos y acusaciones– y al próximo gobierno es convencer al ciudadano de que esos cambios valieron la pena y de que él será el beneficiado. Por ahora eso no ha sido así. Más allá de hermosas cifras de escritorio, la gente no percibe mejoras notables. Pequeñas respuestas a problemas individuales es lo que toca, más allá de las grandes transformaciones para la historia que no sirven de consuelo a una población mayoritariamente pobre, con serios problemas de salario, empleo, bajo poder adquisitivo y, a pesar de estar por encima de cinco naciones del continente, con indicadores sociales todavía de vergüenza.

La Paz, abril de 1997